

Carta Abierta

Nuestro país vive una profunda crisis social y económica, producto de décadas de acciones y decisiones de un grupo particular dentro de la sociedad chilena. Lo anterior ha llevado a quiebres estructurales que se han evidenciado en una baja representación política del pueblo, corrupción en las instituciones y en una clara inequidad e inseguridad económica que compromete el presente y futuro de nuestra sociedad. Como resultado, la ciudadanía se ha levantado en un legítimo movimiento en defensa de sus derechos fundamentales, luego de muchos años de vulnerabilidad que hoy terminan en un colapso social con el estallido de estas movilizaciones. Las menos, en una violencia que se explica por desvalores como la ambición y el egoísmo, que el mismo agotado sistema ha instalado como sinónimo de éxito. Las más, en contundentes, multitudinarias y esperanzadoras manifestaciones pacíficas a lo largo de todo el país, que reflejan el verdadero sentir ciudadano. En este sentido, lamentamos la respuesta del gobierno, la militarización del espacio público y repudiamos cualquier violación a los derechos humanos.

En nuestra Región del Maule, esta crisis social y económica se vive a diario, con una marcada desigualdad económica y una precaria educación pública. Según el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, nuestra Región del Maule junto a la Región del Ñuble son las regiones del país con menores ingresos. A esto se suma que el 43,4% de los trabajadores de nuestra región sólo tenía enseñanza básica al año 2018, en tanto que la tasa de desocupación durante ese mismo año, estaba por debajo de la media nacional (6%). Estas cifras son producto de la existencia de empleos precarios donde no se promueve un crecimiento profesional. Los salarios insuficientes, las deficiencias del sistema de salud, del acceso a la educación, del sistema de pensiones, sumado a la crisis ambiental, los problemas de sustentabilidad y explotación de los recursos naturales, entre muchas otras razones, han profundizado la injusticia social en nuestra región y país, concluyendo en un descontento social, frente al cual no podemos estar ajenos. Por esta razón, nos alineamos con las legítimas demandas sociales, que son fruto de años de injusticias y desigualdades.

En lo que concierne a nuestro quehacer como funcionarios y académicos de una universidad católica y regional, recibimos anualmente estudiantes provenientes, en su mayoría, de sectores con alto grado de vulnerabilidad y muchos desde sectores rurales, quienes con gran sacrificio buscan romper el círculo de la inequidad y desigualdad a través de su formación profesional en la educación superior. En esta tarea, nuestro compromiso ha sido siempre promover el desarrollo integral de nuestros estudiantes, por medio de la formación de profesionales de calidad, críticos y comprometidos con la comunidad, construyendo en conjunto espacios de diálogo que reduzcan las brechas que nos afectan mediante una educación más participativa y en sintonía con las problemáticas sociales. No obstante, es necesario profundizar en la educación sobre los derechos humanos para promover el desarrollo de una sociedad más justa y equitativa, sustentada en la ética y el respeto a todas las personas.

Esta crisis social y sus demandas, nos invitan a repensar la forma en que los distintos estamentos de nuestra Facultad (académicos, administrativos y estudiantes) se vinculan en pos de un proyecto común. Es primordial promover dentro de la institución y sus distintas unidades, el respeto por cada uno de los trabajadores y estudiantes, así como también, escuchar e incorporar las diversas miradas que conviven dentro de nuestra organización.

Manifestamos el anhelo de que estas movilizaciones abran el espacio político-social para la discusión de demandas históricas de la ciudadanía, como son el acceso a una educación de calidad, una cobertura universal de salud y una nueva constitución que refleje los cambios que nuestra sociedad crítica requiere. Asimismo, creemos necesario generar espacios para otro tipo de demandas, como es el respeto a los derechos humanos y de la infancia, junto con un sistema de pensiones justo y solidario, además del acceso al agua y a un ambiente limpio, entre otras necesidades urgentes. Al respecto, queremos manifestar que comprendemos las complejas necesidades de nuestra región y estamos dispuestos a participar en diálogos que promuevan una mejora en la calidad de vida de los maulinos.

En consecuencia y humildemente, nos ponemos a disposición del movimiento social, de las organizaciones no gubernamentales y del Estado de Chile, para dialogar en las diversas instancias donde nuestro quehacer pueda ser requerido, en función de resolver problemas ciudadanos. Lo anterior, entendiendo que el rol de nuestra Facultad de Ciencias Básicas es el desarrollo de conocimiento y la generación de políticas basadas en evidencia científica en favor de la ciudadanía, que aseguren la dignidad de nuestro pueblo, defendiendo la verdad y la libertad, respetando nuestras diferencias y promoviendo un diálogo compartido para conseguir la anhelada equidad y justicia social.

Por una convivencia en sociedad, más equitativa, solidaria y fraterna.

Funcionarios Administrativos y Académicos
Facultad de Ciencias Básicas
Universidad Católica del Maule